



Asamblea General

Distr. general
19 de septiembre de 2019
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 85º período de sesiones, 12 a 16 de agosto de 2019

Opinión núm. 55/2019, relativa a Abdulmalik Mohammad Ahmad Mohammad al-Mukhanqi y Abdullah Mohammad Ahmad Attiah (Emiratos Árabes Unidos)

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 33/30.
2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 14 de febrero de 2019 al Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos una comunicación relativa a Abdulmalik Mohammad Ahmad Mohammad al-Mukhanqi y a Abdullah Mohammad Ahmad Attiah. El Gobierno respondió con retraso el 23 de abril de 2019. El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:
 - a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);
 - b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);
 - c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);
 - d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);
 - e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional,



étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

4. Abdulmalik Mohammad Ahmad Mohammad al-Mukhanqi es nacional del Yemen, se dedica al comercio y está casado. Vive y trabaja en el emirato de Fuyaira, en los Emiratos Árabes Unidos.

5. Abdullah Mohammad Ahmad Attiah también es nacional del Yemen, se dedica al comercio y está casado. Vive y trabaja en el emirato de Sharja, en los Emiratos Árabes Unidos.

a) Detención, reclusión y actuaciones judiciales

6. Según la fuente, el 24 de septiembre de 2014, los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah fueron detenidos al amanecer cuando cruzaban la rotonda de Al-Mobajra en Fuyaira, ciudad ubicada en la costa oriental de los Emiratos Árabes Unidos, por miembros de los servicios nacionales de seguridad vestidos de civil. Estos no presentaron ninguna orden de detención ni explicaron los motivos de la detención.

7. La fuente afirma que, a continuación, los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah fueron llevados a una prisión secreta y sometidos a desaparición forzada durante siete meses. Durante ese período, permanecieron reclusos en dos centros de detención distintos. En abril de 2015, fueron trasladados a la prisión de Al-Wathba, en Abu Dabi, en la que se encuentran actualmente. Desde entonces, se les permite llamar por teléfono a sus familias una vez a la semana.

8. La fuente informa de que, durante su privación de libertad, y con el fin de obligarlos a confesar su pertenencia al movimiento huzí, los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah fueron gravemente torturados, por ejemplo propinándoles brutales palizas, colgándolos desnudos del techo, arrancándoles las uñas de los pies y sometiéndolos a agresiones sexuales. Según la información disponible, los acusados no pudieron dar cuenta de los demás actos de tortura de los que habían sido objeto porque los servicios de seguridad vigilaban sus llamadas telefónicas.

9. La fuente señala que el juicio contra los Sres. Al Mukhanqi y Attiah se celebró a finales de 2015 ante la Sala de Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Federal en Abu Dabi, que funcionó como tribunal de primera y última instancia hasta noviembre de 2016, cuando se modificó la Ley Federal núm. 11. Pese a esto, hasta el momento el tribunal de segunda instancia ha confirmado las decisiones de la Sala de Seguridad del Estado, lo que ha dejado sin efecto el derecho de apelación.

10. La fuente sostiene que la primera vez que se informó oficialmente a los acusados de los cargos que se les imputaban fue durante la celebración de la primera vista ante la Sala de Seguridad del Estado. Ambos fueron acusados de suministrar al movimiento “terrorista” huzí del Yemen vehículos, equipos de comunicaciones y material militar y químico para la fabricación de explosivos y de hacerlos llegar a las ramas del movimiento en ese país pese a conocer su condición de organización terrorista. El Sr. Attiah también fue acusado de crear la organización Safinat al-Sahra para gestionar las finanzas y el patrimonio de los huzíes.

11. La fuente señala que los Emiratos Árabes Unidos incluyeron el movimiento huzí en la lista de organizaciones terroristas en noviembre de 2014, tras la entrada en vigor de la Ley Federal núm. 7 (2014) de Lucha contra los Delitos de Terrorismo. No obstante, eso fue dos meses después de la detención de los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah. Además, el país entró en la guerra civil del Yemen en marzo de 2015, cuando se unió a una coalición liderada por la Arabia Saudita en apoyo del Gobierno del Yemen y contra los huzíes.

12. La fuente sostiene que a los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah se les negó el acceso a un abogado a lo largo de las actuaciones judiciales, y en el juicio solo tuvieron un par de minutos para defenderse antes de ser interrumpidos por el juez. Además, el juez admitió

como prueba las confesiones de los acusados, pese a que estos le habían dicho que habían sido obtenidas bajo tortura. A pesar de esto, las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos no emprendieron ninguna investigación respecto de esas alegaciones.

13. Según la fuente, el juez dictó las sentencias contra los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah en la segunda vista, celebrada el 14 de febrero de 2016, tras un procedimiento abreviado. Ambos fueron condenados a diez años de prisión y a ser expulsados de los Emiratos Árabes Unidos una vez cumplida la pena. Al Sr. Attiah también se le impuso una multa de un millón de dirhams (equivalente a 272.260 dólares de los Estados Unidos) y se decretó el cierre permanente de su empresa y su página web. También se les negó el derecho a recurrir la sentencia y a recibir asistencia consular.

b) Análisis jurídico

14. La fuente alega que la detención de los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah es arbitraria y se inscribe en las categorías I y III.

i) Categoría I

15. La fuente aduce que los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah fueron detenidos sin la correspondiente orden y sin que se les informara de los motivos para ello. Además, las circunstancias de su detención no ofrecían a las autoridades elementos suficientes para considerar que se había producido un delito flagrante, y los detenidos no conocieron los cargos que se les imputaban hasta finales de 2015, durante la primera vista del juicio. Por lo tanto, su reclusión entre el 24 de septiembre de 2014 y finales de 2015 no tenía fundamento jurídico, lo cual contraviene el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 14, párrafos 2 y 3, y 16, párrafo 1, de la Carta Árabe de Derechos Humanos.

16. La fuente indica que los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah fueron objeto de desaparición forzada durante los siete primeros meses de su reclusión. Así pues, fueron privados de la protección de la ley y de las salvaguardias legales que les correspondían como detenidos, incluidos los derechos a un abogado y al *habeas corpus*, en vulneración de los derechos que los asisten en virtud de los artículos 14, párrafo 6, y 22 de la Carta Árabe de Derechos Humanos.

ii) Categoría III

17. La fuente aduce que los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah fueron detenidos sin la correspondiente orden y sin que se les informara de los motivos para ello. Por lo tanto, su detención vulnera el principio 10 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión y el artículo 14, párrafo 1, de la Carta Árabe de Derechos Humanos.

18. Según la fuente, los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah fueron víctimas de desaparición forzada durante siete meses. A este respecto, la fuente sostiene que la desaparición forzada es *prima facie* una forma de detención arbitraria y constituye una vulneración del derecho del detenido al reconocimiento de su personalidad jurídica, en contravención del artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 22 de la Carta Árabe de Derechos Humanos. Además, la desaparición forzada facilita la tortura y constituye en sí misma una forma de tortura, tanto para la persona desaparecida como para sus familiares¹. La fuente alega que, al someter a los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah a una desaparición forzada, las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos incumplieron las obligaciones que les incumben en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

19. La fuente afirma además que a los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah se les negó el derecho a la asistencia consular, en contra de lo estipulado en el artículo 36, párrafo 2, de la

¹ Comité contra la Tortura, *Hernández Colmenarez y Guerrero Sánchez c. la República Bolivariana de Venezuela* (CAT/C/54/D/456/2011).

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y en el principio 16, párrafo 2, del Conjunto de Principios.

20. Según la fuente, la primera vez que los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah comparecieron ante una autoridad judicial fue cuando comenzó su juicio, a finales de 2015, en contravención de lo dispuesto en el artículo 14, párrafo 5, de la Carta Árabe de Derechos Humanos y en los principios 11 y 37 del Conjunto de Principios. Por lo tanto, también se les negó el derecho a impugnar la legalidad de su detención ante una autoridad judicial. La fuente sostiene que esto vulnera el principio 32 del Conjunto de Principios y los artículos 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

21. La fuente recuerda que los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah fueron víctimas de desaparición forzada y permanecieron recluidos en régimen de aislamiento durante los siete primeros meses de su privación de libertad. Además, con el fin de obligarlos a confesar su pertenencia al movimiento huzí, fueron torturados de diversas formas, por ejemplo propinándoles graves palizas, colgándolos desnudos del techo, arrancándoles las uñas de los pies y sometidos a agresiones sexuales. Según la fuente, esto es contrario a la prohibición absoluta de la tortura, consagrada en los artículos 2 y 16 de la Convención contra la Tortura, el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el principio 6 del Conjunto de Principios. También supone una vulneración del artículo 8 de la Carta Árabe de Derechos Humanos y del artículo 26 de la Constitución de los Emiratos Árabes Unidos.

22. La fuente afirma que las confesiones de los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah, obtenidas mediante coacción, fueron admitidas como prueba contra ellos, en contravención del artículo 15 de la Convención contra la Tortura. Además, pese a que durante el juicio los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah informaron al juez de que habían sido sometidos a tortura, este no inició una investigación sobre esas alegaciones. A este respecto, la fuente hace notar que esto forma parte de un patrón sistemático más amplio, que la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados observó en su visita a los Emiratos Árabes Unidos, según el cual los jueces y fiscales no registran ni tienen en cuenta durante las actuaciones judiciales las denuncias de tortura que reciben (A/HRC/29/26/Add.2, párr. 53). La fuente también recuerda que esto constituye una vulneración de los artículos 12 y 13 de la Convención contra la Tortura, el principio 33, párrafo 4, del Conjunto de Principios, y la regla 57, párrafos 2 y 3, de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela). Además, la fuente se remite a la resolución 60/148 de la Asamblea General, que estipula que las denuncias de torturas deben ser examinadas sin dilación y de manera imparcial por las autoridades nacionales competentes.

23. La fuente indica que la Sala de Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Federal está integrada por jueces nombrados directamente por el Ministerio del Interior. Así pues, se encuentra bajo el control *de facto* del Poder Ejecutivo, por lo que no puede considerarse un órgano judicial independiente o imparcial (véase A/HRC/29/26/Add.2, párrs. 30 y 31). La fuente sostiene que, por consiguiente, el juicio de los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah ante el Tribunal Supremo Federal contravino el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 12 y 13 de la Carta Árabe de Derechos Humanos.

24. Además, según la fuente, los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah fueron privados de su derecho a un abogado en todas las fases de las actuaciones. Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos vulneraron así las obligaciones que les incumben en virtud del principio 18, párrafo 3, del Conjunto de Principios y la regla 61, párrafo 1, de las Reglas Nelson Mandela, en los que se establece que los acusados deben tener acceso a un abogado “sin demora”. También infringieron el artículo 109 del Código de Procedimiento Penal de los Emiratos Árabes Unidos, que dispone que los acusados tienen derecho a estar en contacto “permanente” con un abogado. Además, los Emiratos Árabes Unidos negaron a ambas víctimas el tiempo y los medios necesarios para preparar su defensa, en contravención del artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el principio 18, párrafo 2, del Conjunto de Principios.

25. La fuente indica también que los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah solo tuvieron un par de minutos para defenderse antes de ser interrumpidos por el juez. Por consiguiente, se les privó de una audiencia adecuada, lo que hizo que les fuera imposible impugnar las pruebas

de la fiscalía, en contravención de su derecho a la presunción de inocencia. A la luz de lo anterior, la fuente sostiene que las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos infringieron el principio de igualdad de medios procesales.

26. La fuente recuerda también que los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah fueron detenidos el 24 de septiembre de 2014. Los Emiratos Árabes Unidos incluyeron a los huzíes en la lista de organizaciones terroristas en noviembre de 2014, tras la entrada en vigor de la Ley Federal núm. 7 (2014), de Lucha contra los Delitos de Terrorismo. A finales de 2015, los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah fueron oficialmente acusados de facilitar las actividades de la organización “terrorista” de los huzíes, entre otras cosas mediante el suministro de material militar y equipos de comunicaciones y la gestión de sus finanzas y patrimonio. El enjuiciamiento de las víctimas por actos que en el momento de su detención, en septiembre de 2014, no estaban tipificados como delitos en la legislación nacional contraviene el principio *nullum crimen sine lege*, consagrado en el artículo 11, párrafo 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 15 de la Carta Árabe de Derechos Humanos.

27. La fuente sostiene que la Ley Federal núm. 7 (2014), de Lucha contra los Delitos de Terrorismo, en la que se basó la sentencia contra los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah, infringe el principio de seguridad jurídica. El artículo 1 define en términos generales el concepto “resultado terrorista”, que incluye actos como mostrar oposición contra el país y ejercer influencia sobre las autoridades públicas nacionales. El artículo 63, párrafo 1, relativo a las listas de organizaciones terroristas, es igualmente vago, pues estipula que en ellas se puede incluir a personas que supongan una amenaza para el Estado. Esas disposiciones dan pie a una interpretación arbitraria y hacen que para los ciudadanos sea difícil determinar la manera en que deben actuar para cumplir la ley.

28. Por último, la fuente afirma que a los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah se les negó el derecho a recurrir la sentencia, en vulneración del artículo 16, párrafo 7, de la Carta Árabe de Derechos Humanos y el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Respuesta del Gobierno

29. El 14 de febrero de 2019, el Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno las alegaciones de la fuente siguiendo su procedimiento ordinario de comunicaciones. El Grupo de Trabajo pidió al Gobierno que, antes del 15 de abril de 2019, le proporcionase información detallada sobre la situación actual de los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah, así como sus observaciones en relación con las alegaciones formuladas por la fuente. Asimismo, el Grupo exhortó al Gobierno a garantizar la integridad física y mental de los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah.

30. El 23 de abril de 2019, el Grupo de Trabajo recibió una respuesta del Gobierno, presentada con retraso. El Grupo de Trabajo lamenta no haber recibido la respuesta del Gobierno a la comunicación dentro del plazo establecido. El Gobierno no solicitó una prórroga del plazo para responder, posibilidad prevista en el párrafo 16 de los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo. Aunque el Grupo de Trabajo puede emitir una opinión sobre la base de todos los datos recopilados, no puede aceptar la respuesta del Gobierno como si se hubiera presentado a tiempo.

Observaciones adicionales de la fuente

31. El 30 de abril de 2019, la fuente formuló observaciones sobre la respuesta que el Gobierno presentó con retraso.

Deliberaciones

32. Ante la falta de respuesta del Gobierno dentro del plazo establecido, el Grupo de Trabajo ha decidido emitir la presente opinión, de conformidad con el párrafo 15 de sus métodos de trabajo.

33. El Grupo de Trabajo ha establecido en su jurisprudencia su manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de los requisitos internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe

entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones (véase A/HRC/19/57, párr. 68). En el presente caso, el Gobierno ha optado por no impugnar las alegaciones, en principio fiables, formuladas por la fuente.

34. Como cuestión preliminar, el Grupo de Trabajo recuerda su práctica de remitirse a los instrumentos aplicables al Estado demandado, en especial los principales instrumentos regionales de derechos humanos, a saber, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Por lo que respecta a la Carta Árabe de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo se encuentra con importantes dificultades para recibir de la autoridad depositaria información sobre la situación de ratificación. No obstante, en el presente caso, el Grupo de Trabajo señala que, en su informe nacional para el examen periódico universal de 2017, los Emiratos Árabes Unidos afirmaron que habían ratificado ese instrumento y que habían presentado su informe inicial en diciembre de 2013 (A/HRC/WG.6/29/ARE/1, párr. 11). Por lo tanto, el Grupo de Trabajo concluye de manera fiable que, cuando se produjeron los hechos denunciados en el presente caso, el Estado había ratificado la Carta Árabe de Derechos Humanos, de modo que las disposiciones legales le son aplicables.

35. Según la información proporcionada por la fuente, que el Gobierno no ha refutado, los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah fueron detenidos sin la correspondiente orden y sin que se les informara con prontitud de los motivos de su aprehensión ni de los cargos que se les imputaban, en contravención del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 14, párrafos 2 y 3, y 16, párrafo 1, de la Carta Árabe de Derechos Humanos.

36. El Grupo de Trabajo subraya que el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, consagrado en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se aplica a todas las personas y está también garantizado por el artículo 9, que prohíbe la detención y la reclusión arbitrarias. Ambas disposiciones son normas de derechos humanos profundamente arraigadas que quedan reflejadas tanto en la práctica de los Estados como en la jurisprudencia de los órganos internacionales, incluido este Grupo de Trabajo. El Grupo de Trabajo recuerda, por ejemplo, que la Corte Internacional de Justicia ha afirmado que privar de manera ilícita de su libertad a seres humanos y someterlos a coerción física en condiciones difíciles es en sí mismo manifiestamente incompatible con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y con los principios fundamentales enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos². El Grupo de Trabajo recuerda también que la prohibición de la detención arbitraria forma parte del derecho consuetudinario, que tiene un carácter absoluto en el derecho internacional y, por consiguiente, es vinculante para todos los Estados, independientemente de las obligaciones que les incumban en virtud de tratados.

37. El Grupo de Trabajo observa con preocupación que en los últimos años se ha ocupado de una serie de casos en que el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos ha sometido a sus ciudadanos y a nacionales extranjeros a reclusión secreta o en régimen de incomunicación³. El Grupo de Trabajo recuerda que ese tipo de prácticas de reclusión secreta o en régimen de incomunicación dejan de hecho a las víctimas fuera del amparo de la ley y las privan de toda salvaguardia legal⁴. En el presente caso, la fuente también ha alegado que el Departamento de Seguridad Estatal recluyó a los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah en un lugar secreto y en régimen de incomunicación durante siete meses, privándolos así de la protección de la ley, en contravención del artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En tales condiciones de reclusión, estos no tuvieron la posibilidad de comparecer con prontitud ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales ni de acudir a un tribunal, que habría determinado sin demora la legalidad de su privación de libertad.

38. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que la detención y la reclusión prolongada en régimen de incomunicación de los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah por parte del

² *United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran*, fallo, *I.C.J. Reports 1980*, pág. 3, párr. 91.

³ Véanse las opiniones núms. 30/2018, 21/2017, 51/2015, 35/2015, 56/2014 y 12/2014.

⁴ Opinión núm. 76/2017, párr. 51.

Departamento de Seguridad del Estado carecen de fundamento jurídico, en contravención de los artículos 3, 6 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 14, párrafos 1, 2 y 3, y 16, párrafo 1, de la Carta Árabe de Derechos Humanos. El Grupo de Trabajo concluye, por lo tanto, que su detención y posterior reclusión son arbitrarias y se inscriben en la categoría I.

39. El Grupo de Trabajo observa con profunda preocupación las alegaciones fiables de que los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah fueron sometidos a tortura sin que se ordenara ninguna investigación al respecto. En relación con esto, a pesar de que las confesiones de los detenidos se habían obtenido en tales circunstancias, el juez las utilizó para determinar su culpabilidad. Esas prácticas constituyen una vulneración de los artículos 5, 6, 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los artículos 8, 12, 13 y 16 de la Carta Árabe de Derechos Humanos; los artículos 2, 12, 13 y 15 de la Convención contra la Tortura; las reglas 1, 43, párrafo 1, y 57, párrafos 2 y 3, de las Reglas Nelson Mandela; y los principios 6 y 33, párrafo 4, del Conjunto de Principios. El Grupo de Trabajo recuerda que el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ha estimado que la reclusión prolongada en condición de incomunicación en un lugar secreto puede equivaler a tortura tal como se describe en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura (A/56/156, párr. 14). El Grupo de Trabajo considera que la reclusión prolongada en régimen de incomunicación de los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah durante siete meses en una prisión secreta afectó negativamente a su derecho a un juicio imparcial y a la presunción de inocencia, en contravención de los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 8, 12, 13 y 16 de la Carta Árabe de Derechos Humanos. Además, el hecho de que el tribunal conociera las alegaciones de tortura y no tomara ninguna medida al respecto respalda la conclusión de que este carece de independencia, lo que constituye una vulneración del artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 12 y 13, párrafo 1, de la Carta Árabe de Derechos Humanos.

40. Al Grupo de Trabajo le preocupa que la reclusión en régimen de incomunicación de los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah conllevara también la denegación de su derecho a tener un abogado, informarle de su situación y comunicarse con él, de conformidad con los principios 15 a 19 del Conjunto de Principios, así como de su derecho a ser llevados sin demora ante un juez y a ser juzgados dentro de un plazo razonable, conforme a lo dispuesto en los principios 37 y 38 del Conjunto de Principios y en la regla 61, párrafo 1, de las Reglas Nelson Mandela.

41. Según la fuente, los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah fueron juzgados por la Sala de Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Federal. El Grupo de Trabajo ha expresado sistemáticamente su preocupación por la falta de independencia de ese órgano judicial⁵. El Grupo de Trabajo reitera esas preocupaciones y conclusiones relativas a la falta de independencia e imparcialidad del Tribunal. Señala además que no es posible recurrir la sentencia del Tribunal, lo que contraviene los artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 12, 13 y 16, párrafo 7, de la Carta Árabe de Derechos Humanos.

42. Por último, las dos personas a las que se refiere el presente caso son ciudadanas del Yemen. Tanto los Emiratos Árabes Unidos como el Yemen son partes en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Pese a ello, nada indica que los Emiratos Árabes Unidos cumplieran su obligación de notificar al Yemen para que este pudiera prestar la debida asistencia consular a sus nacionales. El principio 16, párrafo 2, del Conjunto de Principios reconoce la importancia de la asistencia consular a un extranjero detenido o preso, mencionando específicamente su derecho a ponerse en comunicación por los medios adecuados con una oficina consular o la misión diplomática del Estado del que sea nacional. Además, el Grupo de Trabajo ha emitido numerosas opiniones en las que también considera que la vulneración del derecho consular afecta a la imparcialidad del juicio⁶.

⁵ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 34/2011, párr. 11; 64/2011, párrs. 23 y 24; 60/2013, párr. 23; y 21/2017, párrs. 48 a 54.

⁶ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 28/2016, 45/2017 y 58/2017.

43. En vista de las consideraciones de hecho y de derecho que anteceden, el Grupo de Trabajo estima que el hecho de que el Gobierno no respetara el derecho a la protección consular que los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah tienen en virtud del derecho internacional consuetudinario, consagrado en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, durante su detención y reclusión iniciales constituye una vulneración del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del principio 16, párrafo 2, del Conjunto de Principios.

44. A la luz de lo que antecede, el Grupo de Trabajo concluye que la inobservancia de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario con arreglo a la categoría III.

45. Por último, en relación con las denuncias de tortura, y de conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes para que tome las medidas correspondientes.

Decisión

46. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Abdulmalik Mohammad Ahmad Mohammad al-Mukhanqi y Abdullah Mohammad Ahmad Attiah es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 5, 6, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y se inscribe en las categorías I y III.

47. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

48. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner a los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah inmediatamente en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

49. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

50. El Grupo de Trabajo alienta al Gobierno a que ratifique el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus Protocolos Facultativos.

51. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes para que tome las medidas correspondientes.

52. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

Procedimiento de seguimiento

53. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

a) Si se ha puesto en libertad a los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah y, de ser así, en qué fecha;

b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones a los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah;

c) Si se ha investigado la violación de los derechos de los Sres. Al-Mukhanqi y Attiah y, de ser así, el resultado de la investigación;

d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de los Emiratos Árabes Unidos con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;

e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

54. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

55. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

56. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado⁷.

[Aprobada el 16 de agosto de 2019]

⁷ Resolución 33/30 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.